

Periodismo y utopía, el final de un oficio

Juan José Tellez

Periodista y director del Centro Andaluz de la Letras.

«NO HE PERDIDO UN EMPLEO, HE perdido un oficio», atinaba a decir Alejandro Víctor García, uno de los mejores periodistas españoles de nuestro tiempo cuando fue despedido de *El País* Andalucía años atrás.

Sin oficio ni empleo, los trabajadores de la industria periodística española se enfrentaban, a comienzos del siglo XXI, con una precarización laboral que incluía –e incluye– salarios cada vez más bajos, horarios cada vez más largos y flexibles, así como la consolidación de un dogma, el de la línea editorial de cada medio que excluía la cláusula de conciencia y a veces incluso el respeto al secreto profesional de los informadores.

Soy uno de los dinosaurios que acecha bajo la cama de Augusto Monterroso. Quiero decir que pertenezco a una generación de periodistas para los que la palabra linotipia no era sinónimo de enfermedad venérea. Incluso conocí a cajistas que no trabajaban en los bancos. La estructura piramidal de las noticias fue fruto de una negociación entre los gacetilleros y los impresores. Luego, aparecieron las nuevas tecnologías: crónicas por teléfono, fotografías de corresponsales a bordo de autocares y crónicas transcritas por funcionarios de correos entre las tinieblas de los telex. Todavía faltaba mucho para el fax y un mundo para que supiéramos que el ciberespacio no era un territorio literario de Ray Bradbury.

La realidad, entonces, ardía a 451 grados Fahrenheit, bajo las tijeras de una dictadura y la torpeza de una *dictablanda* que nos obligaba a escribir entre líneas. La democracia alivió el luto por la libertad pero no erradicó los vicios del autoritarismo. Hasta ahora, acumulo alrededor de veintinueve juicios, pero sólo me condenaron una vez por llamarle perro de presa a un fiscal que se empeñaba en perseguir a un sindicalista.

De aquellos barro, estos lodos. La esperanza que suscitó la muerte del dictador se convirtió en desencanto porque el poder sigue siendo el poder, con independencia del sistema cuyos hilos mueva. La única diferencia entre Dios y un periodista es que Dios sabe que no es periodista. La mayor diferencia entre el poder y el periodismo estriba en que el periodismo cree que es un poder cuando tan sólo suele ser su palafrenero.

Hubo periodismo antes de que existieran los periódicos. Y seguirá habiendo después de que ya no existan. En toda su larga gama de matices: el reporterismo, el de investigación, el de la delación canalla, el justiciero y el tiralevitas, el de la propaganda y el de la valentía. Incluso puede que un mismo profesional asuma diferentes papeles a lo largo de su vida. Si Steven Spielberg nos enseñó en *Parque Jurásico* que la naturaleza siempre se abre paso, esta profesión también lo hace, a través del papel, de la radio,

del cine, de la televisión, de internet o de lo que sea. ¿En qué formato transcribió Jenofonte sus reportajes agrupados bajo la mancheta de La Anabasis? Uno de los primeros ejemplos de la prensa rosa puede todavía leerse sobre los jeroglíficos de las pirámides.

Esa vieja condición de voz de la tribu que asumen los plumillas y los foteritos, los cámaras y los muñecos del plató, los blogueros, los magos del twitter y los correveidiles de instagram, desaparece de tarde en tarde bajo el absolutismo de los intereses editoriales o de la mordaza de cualquier campaña publicitaria; entre la propaganda de los gobiernos o la frivolidad de las sociedades que dejan de ser críticas, valientes y dignas. El periodismo es el reflejo del pueblo que le rodea. Así que, no temáis, cualquier día ambos despertarán y la libertad, por fortuna, seguirá ahí.

La precarización laboral

El periodismo tiene, sin embargo, un precio: el del salario. Recobramos una de nuestras más firmes tradiciones: los periodistas españoles vuelven a pasar hambre. No de libertad, ni sed de justicia. Hambre de Carpanta, de la de mover el bigote, de la de pan y trabajo, las palabras que andaba pintando Javier Verdejo por las calles de Almería cuando le encajaron un tiro en la supuestamente bucólica transición democrática.

Los gacetilleros despedidos a mansalva de las redacciones donde no gustan ni los viejos ni los rebeldes ya hacen cola, como el resto de los precarios, en los comedores de caridad o incluso algunas asociaciones de la prensa han llegado a repartir bolsas de alimentos como si fueran catequistas parroquiales, oenegés de periodistas sin posibles, montes de piedad de los servidores del artículo 20 de la Constitución Española de 1978.

A sesenta euros el artículo, a veces un periodista cobra menos que una empleada del hogar, con todo el respeto hacia esas

chachas históricamente menospreciadas en esa España del quiero y no puedo, de la ostentación y de la apariencia, de la que formamos parte. Los pobrecitos habladores —que era como nos llamaba Mariano José de Larra— no somos otra cosa que los mayordomos de la información, de aquellos habaneros que, a decir de una célebre guajira, se sentían millonarios ricos de la población cuando se sentaban a leer un papelón de esos que llaman diarios.

Adiós a los tiempos de Andrés Bonafux o de Manuel Chaves Nogales, cuando un periodista era el heroico resistente de la bohemia o de la sangra templada en un país dado a los excesos y al cainismo. La crisis de la prensa quizá tenga que ver con la de la economía o la de las nuevas tecnologías, pero desde luego guarda relación con un hecho evidente: y es que hemos dejado de lado nuestro oficio cuando preferimos dar noticias antes que ofrecer información, que no sólo se queda en los sucesos cotidianos sino en su análisis y su opinión contrastada. Como limosneros, le reclamamos al poder que nos obsequiara con unas migajas de realidad, en lugar de arrebatarlas como lo que siempre fuimos, o debimos ser: bandidos generosos que robaban la relativa verdad de los pudientes para repartirla entre el común de los demócratas.

Comenzamos aceptando que la orden de un superior amordazara nuestras entendederas o distrajese a nuestras inexistentes cláusulas de conciencia, para aceptar un finiquito por los servicios prestados y una sucesión de puertas cerradas ante la posibilidad de ejercer de nuevo nuestro oficio. Bajo los puentes de la globalización mediática, unos cuantos clochards afrontan el relente de este tiempo raro en el que el viejo periodismo ha muerto y nadie lleva flores a su tumba quizá porque sus deudos, en un inútil afán de supervivencia, se hayan bebido ya todo el agua de sus jarrones.

La burbuja mundial estalló en 2008 y unos meses más tarde dio de lleno en la línea de flotación de los principales

«Hubo periodismo antes de que existieran los periódicos. Y seguirá habiendo después de que ya no existan.»

grupos mediáticos españoles. Allá por febrero de 2009, se sustanciaba por ejemplo una segregación del influyente Grupo Prisa que, sobre el papel, pretendía insuflar nuevos aires a la empresa, en lo que ya se presumía como una encrucijada histórica, pero que a la postre –y como suponía el comité intercentros del Grupo– ocultaba una reconversión importante y una drástica reducción de plantillas y de condiciones sociolaborales. Ni que decir tiene que se trataba –y se trata en gran medida– del primer grupo de prensa privada en España con una amplia extensión a América Latina. Así que dicho modelo de gestión y de optimización de recursos técnicos y humanos se extendió a muchas otras empresas con menos fuerza y posibilidades, lo que ha conllevado, en el plazo de siete años una creciente precarización del periodismo y una formidable falta de independencia de sus profesionales respecto a los intereses editoriales.

El periodista se diluye

La crisis que, a pesar de los brotes verdes cacareados por los poderes públicos, sigue viviendo el primer mundo es una crisis global. No sólo porque está afectando a otros lugares del planeta que siempre se encontraron en crisis, sino porque no se trata de una crisis económica, sino política, social y cultural. Y, desde luego, una crisis que afecta a un modelo de crecimiento y de supervivencia. En ese contexto, el periodismo, tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, no sólo se transforma sino que, en efecto, se extingue.

En primer lugar, los medios de comunicación convencionales sufren dos impactos negativos muy profundos, tanto por la

caída de la publicidad como la caída de la audiencia o de los lectores, extremos que a menudo se entrelazan. La información *online* crece, sin embargo, a través de canales alternativos que todavía no han encontrado una vía de autosuficiencia que les haga viables como modelo de negocio, más allá del voluntarismo a menudo amateur de sus impulsores.

Así las cosas, la figura del periodista se diluye. Ya apenas se le permite independencia de criterios, salvo que se trate de un *free lance* sometido a la inestabilidad del mercado profesional o laboral y a la censura más o menos extendida sobre todo aquello que se aparte de la hoja de ruta del llamado pensamiento único. El periodista, así, ya no es notario de la actualidad, como se pretendió antiguamente. Al contrario, termina convirtiéndose en el escriba de los propietarios –gubernamentales o privados– del medio para el que presta sus servicios. En gran medida, el redactor no sólo deja de decidir los titulares, el enfoque de la cámara o el lid de la información; también deja de decidir qué es información y qué no.

Por otra parte, cualquiera que disponga de acceso a la red, cámara digital o teléfono móvil, puede convertirse de la noche a la mañana en un transmisor de noticias, lo que no quiere decir necesariamente que pueda ser un informador. Si la mejor forma de ocultar a un elefante es en una manada de elefantes, la mejor manera de ocultar la información es camuflarla en una manada de noticias. La información no es sólo la respuesta a qué, dónde, cómo y cuándo. La información es, sobre todo, la respuesta a por qué. Y para encontrar una contestación plausible, hay que analizar lo que ocurre, contrastarlo y, a ser posible, brindar opiniones diferentes para que el lector, el oyente o el telespectador pueda hacerse su propia idea al respecto.

La crisis económica que envuelve al primer mundo está provocando numerosos efectos en el mapa de la información

mundial. Por ejemplo, desde el eurocentrismo al uso se presta menos atención que nunca a las crisis profundas –demográficas, alimentarias, pandémicas– que sufre buena parte de la humanidad y, en cambio, centramos el foco informativo en las crisis coyunturales de la bolsa, del sistema financiero, del euro o de la deuda soberana o privada de países de clase media que están dejando de serlo.

El ahorro de costes para mantener vivos a los medios pasa por la reducción de plantillas y por la precarización de salarios hasta extremos que hacen inviable la solvencia de la información, lo que no sólo afecta a un negocio sino a un derecho civil de primer nivel. Esa búsqueda del ahorro a toda costa se ceba especialmente en los articulistas de opinión, que empiezan a desaparecer o que terminan ofreciendo gratuitamente su trabajo, o abren alternativas de compleja rentabilidad económica en el ámbito del ciberespacio. Otro tanto ocurre con las agencias de prensa, cuya contratación se está viendo peligrosamente reducida, lo que va a conducir a la desaparición de algunas de ellas, o bien a la limitación de sus corresponsales, delegaciones y enviados especiales a escala mundial, cuando no a la unificación de marcas, soportes o plantillas de reporteros, fotógrafos o avisadores, por lo que todos perderemos en cuanto a calidad, cantidad y pluralismo de la comunicación.

61

La crisis de lo público

Por estas y por otras razones, son necesarios los medios públicos. Porque la información es fundamentalmente un derecho y no necesariamente una forma de lucrarse o de acumular poder, ya sea político, económico o religioso. Sin embargo, resulta sumamente complicado consolidar medios verdaderamente públicos, que favorezcan a los intereses generales de la comunidad, desde un pequeño barrio hasta un estado u organizaciones supranacionales. Por lo común, los gobiernos suelen ser reacios a perder el control de dichos medios e intentan

manejarlos a su antojo, aparentando en mayor o menor grado una gestión democrática que rara vez existe, aunque todos tenemos en mente el modelo clásico de la British Broadcasting Corporation, que también empieza a entrar en una remodelación crítica que puede dinamitar su legendario estatus.

En España, existe una radiotelevisión pública a escala estatal y numerosas cadenas de radiotelevisión en las distintas comunidades autónomas que representan el poder político de nuestras regiones. También se ha implantado ese mismo modelo ligado a los municipios. La crisis económica está llevando lentamente a constreñir sus presupuestos, en un camino que puede llevar a su privatización total o parcial. Además, en el caso de la corporación de Radio Televisión Española, la que funciona a escala estatal, el relevo político en el Gobierno español en 2011 conllevó, de entrada, un cambio sustancial en la extracción parlamentaria de su presidente. El Partido Popular eliminó una cláusula que se incorporó durante el penúltimo mandato de los socialistas y que exigía una mayoría cualificada para la designación del principal responsable de dicha radiotelevisión pública. Así, el todavía presidente de la mayor corporación pública audiovisual de España fue elegido por mayoría simple, sin llegar a un consenso con la oposición, como anteriormente se había establecido. El camino hacia la independencia respecto a los gobiernos de turno volvió a quebrarse y no parece que existan garantías de que en el futuro se pueda consolidar una fórmula irreversible para garantizar que la radiotelevisión que pagan todos los españoles no incurra de nuevo en el propagandismo gubernamental.

Ese control de los partidos mayoritarios se hace sentir también, sin ningún tipo de cortapisas, en la mayor parte de las televisiones autonómicas y en las locales, en donde a veces ni siquiera existe consejo de administración en donde se encuentren porcentualmente representados los

partidos de la oposición. En ese escenario, estamos asistiendo a la desaparición de numerosas emisoras comunitarias, principalmente de radio, que operaban sobre todo en zonas urbanas y que vienen siendo desmanteladas, como también ocurre con numerosas organizaciones no gubernamentales que desaparecen al faltar apoyo público y ayudas presupuestarias de las que nutrirse.

Somos muchos quienes nos encontramos profundamente convencidos de la necesidad de profundizar en ese modelo de radiotelevisión pública, de hacerlo más plural, más democrático. Pero mucho me temo que no va a ser posible y no sólo por la voluntad manipuladora de muchos gobernantes sino por la falta de prestigio que esa manipulación ha provocado entre la audiencia. Basta comprobar como en las movilizaciones populares en contra de los recortes sociales y de los que está sufriendo la administración y sectores públicos como el de la educación y el de la salud, los manifestantes suelen plantear como alternativa la desaparición de las cadenas autonómicas. Como si fueran, en parte, las causantes del problema y no fueran, en realidad, parte de la solución.

Los medios públicos, cuando realmente son públicos, nos ayudan a vertebrar sociedades y a prestar un impagable servicio a la comunidad en la transmisión de informaciones que pueden ayudar a mejorar la vida cotidiana. Pero también, no nos engañemos, los medios públicos suponen la única esperanza para la supervivencia del periodismo. El de verdad, el de siempre. Y recordemos la célebre frase que se atribuye indistintamente a Thomas Jefferson y a Sir Winston Churchill, quienes según la leyenda decían preferir un país sin gobierno y con periódicos que un país con gobierno y sin periódicos. Los periódicos y las emisoras de radiotelevisión privadas obedecen, como su propio nombre indica, a intereses particulares. Los periódicos y las emisoras de radiotelevisión públicas debieran obedecer a intereses generales,

como una Constitución, un hospital o simplemente un semáforo.

El fin de la objetividad y la entronización de la subjetividad

El pluralismo en las opiniones de los medios se había visto recortado considerablemente desde los primeros años de la transición: incluso en el tardo-franquismo, tan pródigo en condenas, incluso de prisión, contra los pobres habladores, permitía paradojas tan insospechadas como que el suplemento cultural del diario *Arriba*, feudo de Falange Española, fuera dirigido por dos compañeros de viaje de la izquierda antifranquista, Javier Villán y Félix Población. En aquel periodo, cuando los españoles progresistas buscaban la complicidad de quienes escribían entre líneas a despecho de la censura, no era difícil comprobar como en las principales cabeceras –*Pueblo*, *Informaciones*, *Ya*, *ABC* y, posteriormente, *El País* o *Diario 16*, por no hablar de las revistas políticas y económicas–, convivían articulistas de muy diferente porte ideológico.

Pertenezco a una generación de periodistas que quiso, quizá por primera vez en la historia española, ser absolutamente honrada para con sus lectores. Hasta los años 70 y salvando honrosas excepciones, se había santificado la idea de que el buen periodista era un transmisor de la verdad. Y la verdad, como todo concepto maximalista, era absoluta, infalible, irrefutable, perfecta. Sobre esos cimientos, se creó un falso mito que ha perjudicado a generaciones de periodistas y de lectores en este país; aunque dicha dolencia se contagiara a otros países cuyo marco de libertades era más amplio. Me refiero al tópico de la objetividad, como la mejor perspectiva desde la que puedan interpretarse las noticias.

A nuestra generación, la que hoy roza el medio siglo vital, le cupo en suerte desmontar la trola de esa verdad inamovible, única y permanente, por algo que venía a ser lo mismo, pero más humanizado, más

imperfecto, más cotidiano y más libre: los periodistas teníamos la obligación de ser veraces pero no íbamos a transmitir la verdad como un dogma de fe; porque la verdad, o no existe, o se encuentra más repartida que el gordo de la lotería del Niño.

Los periodistas del fecundísimo siglo XIX del periodismo español ya lo supieron. Muy pocos de entre ellos se arrogaron el sacerdocio de la verdad, muy pocos se vistieron con esa túnica sagrada, sino que amanecían en las imprentas con su nombre al lado de las manchetas de los periódicos que fueron lo suficientemente humildes como para asumir su vinculación estrecha con una ideología, con un partido, con un sindicato, con un círculo de agricultores o ganaderos, o cualquier otro tipo de organización. Esa franqueza, esa falta de máscara ante el lector, fue la tónica dominante de un siglo convulso en el que muchos gacetilleros tuvieron que vérselas con el totalitarismo y con la muerte.

Pero esa tradición, como muchas otras, resultó violentamente rota por la guerra civil. Ya no más partidos, un sólo sindicato y, si se mantuvo abierto el círculo de agricultores y ganaderos, sus socios apenas podrían leer ni mucho menos escribir. Entre 1800 y 1939, la oferta de la prensa española incluía cabeceras socialistas, carlistas, católicos, ateos, protestantes, conservadores, republicanos, anarquistas, territoriales o, simplemente, comerciales. La dictadura, ya durante la propia contienda y a escala estatal, cerró numerosos periódicos vinculados con organizaciones democráticas. O les reconvirtió, tanto a estas publicaciones como a diarios vinculados a empresas familiares o de otra índole, expropiándoles y metiéndoles en aquel extraño saco roto que fue la Cadena de Medios de Comunicación del Movimiento, disuelta y reprivatizada en su mayor parte, a raíz de la normalización democrática de 1977

En la posguerra, bajo una feroz censura y control estatal, cuyas dimensiones

«Los medios públicos, cuando realmente son públicos, nos ayudan a vertebrar sociedades y a prestar un impagable servicio a la comunidad en la transmisión de informaciones que pueden ayudar a mejorar la vida cotidiana.»

despiertan escalofríos, la situación varió ligeramente al aumentar en cierta medida el pluralismo del pueblo español, con la emergencia de un mundillo sociocultural que estaba naturalmente vigilado por la estructura del régimen pero que no nacía en su seno, sino arraigado en torno a la Iglesia y otras entidades de la época. No sería, empero, hasta el 18 de marzo de 1966, con la Ley de Prensa e Imprenta que preparó Manuel Fraga, cuando la dictadura franquista intentó en vano reconciliarse con la realidad. A través de su artículo tercero, desapareció la censura previa, salvo en enclaves bajo hipoteca militar como era entonces el sur de la Península Ibérica, como un frente geoestratégico de primer nivel. Pero, además, se incluían brindis al sol, posiblemente bienintencionados pero hipócritas, como era la consagración de la libertad de expresión y el derecho a la información, absolutamente inviable en un sistema de relaciones políticas basado en la falta de transparencia, el miedo y la represión a ultranza.

Claro que, en vez de censura, se patentó el secuestro de aquellas publicaciones que se pasaran de la raya, un concepto que siempre estuvo sometido a la arbitrariedad del censor y que supuso un altísimo coste económico para los editores y los periodistas que fueron objeto de sanción. Esa sutileza que intentaba lavar la cara del franquismo, suponía la pervivencia de la mordaza y bien que se notó en torno a los acontecimientos que llevaron al cierre del diario “Madrid” y a la explosión controlada del edificio que le sirvió de sede.

Fue durante esos años, enormemente convulsos y confusos, cuando empezó a primar el concepto de objetividad. Malicio que, en un principio, dicha palabra intentó diferenciar entre los periodistas que pretendían hacer su trabajo toreando a la censura y aquellos otros adictos al régimen, propagandistas de aquel tiempo en donde se rapaba a los rebeldes y se ejecutaba a los demócratas. ¿Qué significaba, entonces, el concepto de objetividad? De un lado, la oficialidad pretendió bendecir con ella a todo aquello que se atuviera al discurso dogmático del régimen, alejándose de veleidades frívolas o subversivas. Pero para ese último y minoritario sector de la sociedad española, la objetividad venía a significar todo lo contrario de lo que preconizaban los voceros adictos al Caudillo, esto es, rigor, independencia, lo que hoy englobamos precisamente bajo la palabra veracidad.

La objetividad, pese a ese origen razonable, fue convirtiéndose en un antifaz que paulatinamente fue camuflando el rostro de aquellos medios de comunicación que defendían el estatus quo del franquismo, aunque no comulgaran con toda su parafernalia. Era la cadena de emisoras locales que terminaría convirtiéndose en la Ser, frente a Radio Nacional de toda la vida; era ABC frente al *Arriba*; eran *Pueblo* o los eclesiásticos *Ya* y *Radio Popular*, contra *El Alcazar* y *Fuerza Nueva*. Andando el tiempo, el aparente pregón de los hechos supuestamente objetivos como palabra mágica e incontestable –que tuvo gran calado popular– se fue difuminando tras el comportamiento tibio de algunos de estos medios respecto a la conquista de las libertades. Ellos, los de siempre, seguían invistiéndose de objetividad como si fuera un escudo que le pusiera a salvo de toda aquella horda de librepensadores que estaban llenando las redacciones y que incluso habían tomado el bisoño *Informaciones* o en semanarios de tanta enjundia y de tanta historia como *Cambio 16*, *Triunfo* o *Cuadernos para el Diálogo*. Todo esto coincidió con la agonía del franquismo y con la aparición de una historieta de Lucky Luke

en la que muchos periodistas descubríamos el lema que iba a servirnos de norma de conducta para nuestra vida profesional: «Independiente, siempre; imparcial, nunca», rezaba la máxima que podía leerse en un ficticio periódico de aquel Far West de colorines que recorría el vaquero del eterno pitillo en la boca.

Ya no más objetividad. ¿Era el periodista un ángel, un semidiós que pudiera alzarse por encima del bien y del mal, un espectador privilegiado que describiera la jugada sin participar emotivamente de ella? No. Los periodistas de mi generación dijimos que no, como lo había cantado Raimon respecto a un mundo

«La historia de la humanidad se llama Torquemada y sus actos han condicionado a la literatura, a las artes plásticas, al teatro, al cine, a la filosofía o a la música, entre otras muchas disciplinas creativas.»

del que no formaba parte. La información tenía muchas esquinas y como los ciegos de la fábula era imposible describir al elefante entero, salvo –poquito a poco– su trompa, sus patas, sus orejones enormes. Sin embargo, resulta paradójico que ahora, tantos años después, ocurra justo lo contrario, la entronización de la subjetividad, la aceptación de la propaganda y la escasa exigencia de rigor informativo ante ese otro periodismo que se convierte en simple espectáculo de entretenimiento y que, hoy por hoy, llena las principales tribunas mediáticas.

La Ley Mordaza

Cuando la dictadura moría matando, la principal utopía fue la de las libertades y, en ese contexto, la democracia real sigue sin ser una meta sino un camino. Y en ese empeño milita buena parte de la ciudadanía, como españoles, como europeos, como seres humanos, y como

creadores, periodistas o, simplemente, ciudadanos. Suelen ser eficaces las tijeras de todas las censuras, pero el empuje de quienes buscan espacios abiertos ha sido tenaz y perpetuo a lo largo de la historia, como demuestra esa vieja denuncia grabada en la piedra del teatro romano de Cádiz por un cantero rebelde y recientemente descubierta por los arqueólogos: «Balbe latro», que traducido resulta algo así como «Balbo, mangante».

Quemas de libros y de herejes, la cárcel y el destierro como destinos frecuentes, la palabra tachada, el índice de lo prohibido. La historia de la humanidad se llama Torquemada y sus actos han condicionado a la literatura, a las artes plásticas, al teatro, al cine, a la filosofía o a la música, entre otras muchas disciplinas creativas. Y, por supuesto, también han sufrido sus terribles mordiscos los medios de comunicación que ahora padecen, al igual que la mayor parte de los españoles, los efectos de la Ley Mordaza, que supone un claro blindaje del poder, que ya contaba con cortafuegos informativos tan considerables como los que protegían a la familia real española. Ahora, el escudo legal se extiende a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los principales mandatarios. Al recorte económico, se suma de nuevo el tijeretazo a las libertades que, otra vez, no sólo afecta al periodismo sino a los ciudadanos en general.

- 65 La nueva Ley Orgánica 4 / 2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, constituye, desde luego, un refuerzo y un blindaje a los abusos de la autoridad frente a la ciudadanía. De hecho, ese es el criterio que sostiene la Coalición Defender a quien Defiende, formada por colectivos sociales, organizaciones de derechos humanos, juristas y periodistas, que a mediados de diciembre presentó una triple demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra la Ley Mordaza y la amenaza que esta norma supone para el ejercicio de la protesta y la libertad de expresión.

En la demanda, se alude a una revista navarra, Ahotsa que, tras publicar imágenes sobre abusos policiales cometidos durante una redada, fue denunciado por la Policía Nacional en la Subdelegación del Gobierno, desde donde se advirtió a los periodistas que evitasen este tipo de noticias, ya que podrían suponer una sanción de entre 601 y los 30.000 euros, cantidades que podrían suponer su quiebra. Según dicha denuncia, la llamada Ley Mordaza propicia un retorno a la situación derivada de la Ley de Prensa de 1966, la que promulgó Manuel Fraga bajo la dictadura franquista, erradicando la censura previa, pero provocando lo que empieza a ocurrir de nuevo, la autocensura por el temor a las sanciones.

Otras nuevas demandas ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, se refieren a otra publicación, La Directa, así como dos fotoperiodistas del periódico Diagonal. A pesar de que este litigio trascendió en plena campaña electoral, su repercusión no fue notable, lo que dice o maldice de nuestro prurito democrático y garantista.

«El litigio se apoya en el estatus jurídico de *víctima potencial*, es decir, el daño inminente que puede suponer la aplicación de la ley Mordaza sobre un derecho protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos –puede leerse en el preámbulo de la demanda–. Específicamente, la demanda se centra en los abusos que afectan más directamente al derecho a la libertad de expresión e información.»

Echen un vistazo al libro *Defender a quien defiende: Leyes Mordaza y criminalización de la protesta en el Estado Español*, es un texto coral de ocho capítulos, coordinado por David Bondia, en el se recogen diversos casos que abundan en esta misma cuestión. El abogado Diego Boza, que forma parte de dicho colectivo, entiende que esta ley agrava una serie de sucesivos recortes en las libertades que venían de antiguo: «El recorte de derechos y la criminalización de la protesta

social es algo que viene de largo. Está en la base de las políticas que se han desarrollado en los últimos años a raíz del recorte de derechos que el Gobierno de Rajoy y gobiernos anteriores fueron introduciendo».

Se trata, desde su punto de vista, de la represión premeditada y sistemática de

«El periodista ya no es notario de la actualidad, como se pretendió antiguamente. Al contrario, termina convirtiéndose en el escriba de los propietarios –gubernamentales o privados– del medio para el que presta sus servicios.»

los movimientos sociales, a fin de provocar su descabezamiento: «Se castiga a los escraches, se castiga la ocupación de sucursales bancarias, la oposición a los desahucios, es decir, todo lo que ha sido el movimiento social de la Plataforma Afectados por la Hipoteca encuentra en la Ley Mordaza una respuesta legislativa que supone una sanción». Y se castiga a los medios que se atrevan a burlarla.

Periodismo y derechos humanos

El crack de 2008 también afectó extrañamente a la publicidad en los medios de comunicación, como si no fuese necesario invertir más en dicha materia para vender mejor los productos que ya no demandan los temerosos consumidores de nuestros días. A pesar del indudable repunte publicitario de 2014 y 2015, todos los estudios apuntan a que será muy complicado volver a la facturación publicitaria que las cajas del periodismo español registraban en los años previos al estallido de todas las burbujas.

Fuere como fuere, al haber menos anuncios y por lo tanto menos ingresos, numerosos editores decidieron recortar

plantillas y dejarlas a rape, como si no importase la calidad del producto informativo a la hora de venderlo. En Francia, hizo falta que el propio Gobierno salga en auxilio de los periódicos. Y en nuestro país, la marea roja de la contabilidad alcanza incluso a las costas de imperios multimedia que parecían sobradamente consolidados. Claro que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay más de un ERE que aprovechó tal coyuntura como un formidable pretexto para recortar la nómina y que le saliera barata la poda de trienios.

En los medios de comunicación de este lado del mundo, la falta de liquidez ha conllevado también una evidente falta de pluralismo bajo una misma cabecera o logotipo de radio y televisión: con un ejército cada vez más numeroso de mano de obra dispuesta a abaratar sus expectativas para dejar de militar en las colas del paro, no corren buenos tiempos para reivindicar la cláusula de conciencia, el secreto profesional o el estatuto del periodista.

El periodismo es información, la información es poder y la democratización de ese poder sigue constituyendo una formidable utopía. Sin embargo, la domesticación mediática contribuye a consolidar el actual imaginario ideológico, profundamente conservador, en el que está inmersa buena parte de la sociedad española. Algunas alternativas periodísticas que han hecho frente al actual sistema y a la actual crisis, desde una perspectiva claramente progresista, se han consolidado a pesar de la ausencia de respaldo institucional. Entre ellas, figura *Periodismo humano*, un blog atento muy especialmente a los brotes de disidencia, a las migraciones y a los nadie, que puso en marcha el fotoperiodista asturiano Javier Bauluz, ganador de un Pulitzer cuando cubría las matanzas en la región de los Grandes Lagos.

Quizá la mejor bandera para seguir defendiendo la utopía que encierra el ejercicio del periodismo, más allá de las

dificultades a las que se enfrentan sus profesionales, debiera ser la defensa de los derechos humanos, a través de cualquier formato y a pesar de los pesares. Así que cuando principiaba la conciencia pública de la crisis, en 2009, Bauluz consiguió que la asamblea general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, reunida en Sevilla, suscribiera un documento que podría servir como hoja de ruta para todos aquellos que consideren que el periodismo no estriba tan sólo en un remedo torpe del viejo pan y circo.

El texto, que contó con el apoyo de una veintena de organizaciones nacionales e internacionales como la Fundación Ecología y Desarrollo, la Federación Colombiana de Periodistas, el Bahrain Center for Human Rights, la Junta Islámica española, la Asociación Pro Derechos de la Infancia, la Asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso o varias facultades de comunicación, es hasta cierto punto simple y dice así:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco ético del periodismo.

El derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente.

Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones.

Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos.

La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio público a los ciudadanos que

no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares.

La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y los periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados.

Hasta cierto punto simple porque, con independencia de las controversias que todavía existen respecto al concepto de derechos humanos o, en otra medida, el de derechos civiles, no solemos tener claro de qué se trata, pero sabemos perfectamente de qué no se trata.

Y no se trata, sin ir más lejos, de que, a escala internacional, los periodistas sigan muriendo a manojitos –64 en 2015, sin contar 6 colaboradores y 18 logueros según los datos de Reporteros Sin Fronteras–, sin que se persiga judicialmente a sus asesinos, como bien demuestran los casos de Juan txo Rodríguez en Panamá, de José Couso en Irak o de Ricardo Ortega en Haití, por citar tan sólo tres ejemplos españoles.

Como tampoco se trata de que los mismos medios que airean las vulneraciones de los derechos humanos que puedan existir en Cuba, en China, en Venezuela o en Bolivia, presten sordina a esos mismos excesos en Colombia, el México, en Estados Unidos, en Israel o en la Rusia de Putin.

Como tampoco se trata de que los periódicos y las emisoras que proclaman sus convicciones en esta materia acosen a sus profesionales por intentar ejercer la independencia de puertas para adentro. De hecho, una formidable utopía sigue siendo la de llegar a fin de mes. —